



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE UN RECURSO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES RECLUSAS Y EX RECLUSAS CON O SIN HIJOS/AS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

El artículo 11 del **Decreto 279/2019**, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, atribuye a la Dirección General de Igualdad competencias en materia de asistencia a las víctimas, prevención y erradicación de la violencia de género.

La citada **Ley 5/2005** establece en su título preliminar, la necesidad de prevenir y combatir la violencia de género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral. La Estrategia de Actuación Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid (2016-2021) responde a un compromiso del Gobierno, dentro de las sucesivas políticas y actuaciones internacionales, europeas, nacionales y autonómicas en materia de violencia de género.

Por ello, y conociendo la realidad madrileña, se pretende, entre otros objetivos:

- Mejorar las medidas y actuaciones en materia de prevención y sensibilización, de tal manera que se llegue a todos los sectores y niveles de la población.
- Consolidar un modelo de atención integral a las víctimas de la violencia de género que confiera identidad a la Comunidad de Madrid.
- Incrementar los mecanismos de coordinación institucional que permitan una evaluación y seguimiento continuo de las actuaciones en materia de violencia de género, tanto en lo que respecta a los servicios y recursos como a sus usuarias.
- Mejorar los recursos y las medidas dirigidas a aquellas víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, entre las que se encuentran las **mujeres reclusas y ex reclusas**.

Con estas medidas se pretende proporcionar a las mujeres en situación de dificultad social y con recursos escasos, así como a sus hijos/as, la integración en la sociedad atendiendo sus necesidades mínimas vitales, la promoción social y, en definitiva, favorecer su autonomía y a su desenvolvimiento en la sociedad.

Uno de esos grupos de mujeres con especiales dificultades, lo conforman las mujeres reclusas o ex reclusas, carentes de apoyo familiar y de medios económicos, en algunos casos, con menores a su cargo, que se encuentran en situación de exclusión social y que por sus características familiares particulares, requieren una intervención social que ofrezca un servicio de acogida y apoyo integral, en los casos en que proceda, posibilitando su inserción total y efectiva en la sociedad normalizada.

Hace treinta y cinco años (1983), en España había 480 mujeres encarceladas, diez años después superaban las 5.000 mujeres, lo que da cuenta de la rápida ascensión



del número de mujeres encarceladas. Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2017 había 4.365 mujeres reclusas, lo que supone un 7,42% del total de internos.

Los delitos más habituales en el certificado de penales de las mujeres son los relacionados con el tráfico de estupefacientes a pequeña escala o en conexión con ella, hurtos, robos y estafas.

El endurecimiento de la persecución de los delitos de estupefacientes, las largas condenas con ingresos obligatorios y los flujos migratorios desde América Latina, en el que muchas mujeres, por necesidad, son descubiertas con droga en el aeropuerto, explican la alta tasa femenina en prisión. Ello sin perjuicio de que la crisis económica también ha afectado a mujeres españolas y extranjeras con residencia legal, que delinquen para salir de la precariedad.

Todo ello, a pesar de que a partir del año 2010, momento de la reforma penal que redujo las penas máximas de las sentencias por drogas, ha propiciado su descenso.

Los delitos violentos que cometen, casi nunca tienen víctimas ajenas. Los crímenes se circunscriben a la familia y son perpetrados por mujeres que habían sufrido previamente malos tratos o violencia intrafamiliar, completando el círculo de la violencia.

La ONU ha puesto de manifiesto en un informe del año 2013, el "fuerte vínculo entre la violencia contra la mujer y la encarcelación de las mujeres, ya sea antes, durante o después de la encarcelación".

Igualmente, un estudio nacional elaborado en los últimos años, ha hecho aflorar un 88% de casos de malos tratos en el pasado de las internas, y hasta un 25% de víctimas de abusos sexuales.

En España, hay cuatro cárceles exclusivas para ellas: Brieva (Ávila), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Wad-Ras (Barcelona) y Madrid I-Alcalá Meco, esta última cada vez más centrada en las preventivas a la espera de juicio. El resto están en módulos femeninos incrustados en macrocárceles de hombres, por lo que al ser un porcentaje pequeño en relación a los hombres (7,42%), se encuentran más invisibilizadas y más marginadas, manifestándose en la escasa oferta formativa, laboral y de ocio, considerada clave para la reinserción social.

La tasa de maternidad entre las presas es notablemente mayor que en el conjunto del país, mientras la media en España es de 1,4 hijos por mujer, ellas tienen más de dos hijos de media.

Por otro lado, las consecuencias familiares de que la mujer sea la encarcelada son enormes, ya que cuando un padre entra en prisión, la familia queda en desamparo, porque normalmente son ellos los que traen el dinero a casa, pero cuando es la madre la que entra, la situación es de absoluto "desgarro emocional".

Por ello, expertos coinciden en que la receta para reducir la alta tasa de encarcelamiento de mujeres en España es el diseño de otras políticas sociales y más



alternativas penales, favoreciendo medidas de régimen abierto frente a la cultura nacional contraria a las medidas alternativas, en la interpretación de que no se ha hecho justicia si no se ingresa en prisión.

Por lo anteriormente descrito, dentro de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, gestionada por la Dirección General de Igualdad, se quiere desarrollar un recurso residencial destinado a la prestación de servicios de atención integral dirigidos a las mujeres reclusas y ex reclusas con o sin hijos a cargo, carentes de apoyo familiar, de recursos económicos y/o en riesgo de exclusión social, proporcionándoles alojamiento temporal, seguro, manutención y otros gastos, así como un tratamiento integral de recuperación que, desde los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, favorezca la normalización de la unidad familiar, por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación.

Las destinatarias de este recurso son:

- Mujeres reclusas con o sin hijos menores a cargo, que están cumpliendo tercer grado penitenciario y que necesitan un recurso residencial , para continuar cumpliendo al condena impuesta hasta que obtengan la libertad vigilada
- Mujeres con o sin hijos a cargo en situación de libertad condicional o definitiva que, al finalizar su estancia en el centro penitenciario, no tienen el apoyo de recursos económicos, familiares o institucionales para su reinserción social.

La gestión de este centro se está llevando a cabo actualmente a través de un contrato de servicios denominado “Gestión de un recurso para la atención integral de mujeres reclusas y ex reclusas con o sin hijos/as de la Comunidad de Madrid”, estimándose la forma más apropiada para articular su funcionamiento. Teniendo en cuenta las características especiales de este recurso, por sus exigencias tanto personales como materiales, no es posible satisfacer de forma directa desde este centro gestor con la dotación personal y material actual, y cuya ampliación no se considera oportuna, por lo que se trata de aprovechar la organización ya puesta en funcionamiento por entidades que trabajan de forma comprometida con población reclusa femenina.

Habiendo finalizado la prórroga del anterior contrato de servicios para el 31 de diciembre de 2019 y, persistiendo la necesidad de continuar con la labor de este recurso, se inicia el expediente para la tramitación de un nuevo contrato de servicios a fin de permitir la continuidad de este recurso de atención integral para mujeres reclusas y exreclusas con o sin hijos/as en la Comunidad de Madrid.

Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD

Fdo.: M^a del Carmen Rodríguez García.

